



BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ – PROYECTO GUATEMALA

PIM – PAQUETE DE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE GUATEMALA

Número 106, julio de 2012

- 1 NOTAS DE COYUNTURA
- 2 ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA – EN GUATEMALA
 - 2.1. INTERLOCUCIONES CON AUTORIDADES GUATEMALTECAS Y CUERPO DIPLOMÁTICO
 - 2.2. REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 - 2.3. ACOMPAÑAMIENTOS
 - 2.4. SEGUIMIENTO
 - 2.5. OBSERVACIONES
- 3 ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA – FUERA DE GUATEMALA
- 4 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

1. NOTAS DE COYUNTURA

IMPUNIDAD

El cierre del Archivo de la Paz genera protestas

Guatemala, 02.07.2012 (PL).- Con pancartas y consignas en contra del Secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, extrabajadores de la Dirección del Archivo de la Paz (DAP) manifestaron su rechazo al cierre del Archivo operativo durante los cuatro últimos años. Marco Tulio Álvarez, exdirector de la DAP, indicó que con apoyo de organizaciones sociales están gestionando la visita de un relator de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los exempleados entregarán una copia de ocho informes indicando los avances sobre la creación de una base de datos que contiene los documentos digitalizados.

Organizaciones exigen esclarecer intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos

Guatemala, 14.07.2012 (AC).- Entidades sociales demandan que se investiguen los casos recientes de intimidación en contra de activistas de derechos humanos, en particular contra la sindicalista Melvy Lizeth Camey Rojas, quien se encuentra gravemente herida, y el líder indígena Domingo Hernández Ixcay. Según un comunicado del Frente Nacional de Lucha (FNL), las acciones contra líderes y lideresas departamentales, entre ellas las agresiones a Camey y el asesinato del abogado Ricardo Morataya, se suman a la muerte de César Efidio Carrillo, defensor sindical que murió a consecuencia de heridas causadas por arma de fuego en el 2011. El FNL exigió al Ministerio Público (MP) investigar de forma eficaz los tres casos y dar seguimiento a las denuncias presentadas por amenazas de muerte contra dirigentes sindicales. Por su parte, organizaciones pro-derechos humanos solicitaron el esclarecimiento del atentado contra Domingo Hernández Ixcay, porque el allanamiento de su residencia fue acompañado por una nota intimidatoria (“Dejen esta nota sobre el cadáver.”).

El aumento de la presencia de elementos del ejército en Cuarto Pueblo atemoriza a las comunidades

Guatemala, 17.07.2012 (AC).- Las comunidades de Cuarto Pueblo, ubicado en Playa Grande, Ixcán, Quiché, denunciaron la presencia de unos 30 elementos del ejército y la falta de información proporcionada por el Estado sobre la visita a esta localidad, una de las más afectadas por las masacres durante el conflicto armado interno. Anselmo Roldán de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Área de Ixcán (ADDAHI) denunció, en declaraciones hechas a CERIGUA, que los militares han ingresado en las escuelas sin solicitar el permiso a las direcciones de los establecimientos y sin respetar los horarios de las clases. Las comunidades se reunieron el domingo 15 de julio para solicitar la retirada de los elementos del ejército. En un comunicado de prensa ADDAHI solicitó al Presidente llevar a cabo las acciones necesarias para retirar a los militares del área asegurando así el respeto a las demandas de la población indígena.

TIERRA

La reducción de las desigualdades territoriales es la clave de un desarrollo sostenible.

Guatemala, 10.07.2012 (AC).- Es importante reconocer la importancia del territorio y la reducción de las desigualdades que agravan la situación económica, social y ambiental en los países como elementos clave de un desarrollo sostenible. La reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se reunió en Quito, Ecuador, y contó con la presencia de las delegaciones de la región, representantes de CEPAL, funcionarios de gobierno del país anfitrión y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los participantes instaron a los gobiernos a formular estrategias de desarrollo del sistema de ciudades que incluyan el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental.

EFFECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN

No se encuentra un acuerdo a las disputas por actividades mineras

Guatemala, 23.07.2012 (AC).- Las disputas por actividades mineras en Guatemala se acentuaron el viernes 20 de julio durante la Vista Pública que se efectuó en la Corte de Constitucionalidad (CC), donde los sectores indígena y empresarial, así como el Ministerio Público (MP), expusieron sus posiciones en relación a la Ley de Minería. En la audiencia, la abogada Lucía Xiloj - en representación de las agrupaciones indígenas - pidió la anulación de la Ley de Minería por considerarla inconstitucional al contravenir la Ley de Amparo y la Constitución. Karla Valenzuela Elías de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicitó la reforma de la ley con el objetivo de que esta incluya las consultas populares contempladas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, Mario Fuentes Destarac, abogado del sector empresarial, rechazó las propuestas de modificaciones y enfatizó que el Convenio referido no estaba vigente cuando se aprobó la normativa y añadió que esta cumple con todos los requisitos para su aprobación.

Tribunal Popular condena a Goldcorp por sus proyectos mineros altamente dañinos para los pueblos

Guatemala, 20.07.2012 (AC).- El 14 y 15 de julio el Tribunal Popular Internacional de Salud (TPIS) condenó las actuaciones de la empresa transnacional canadiense Goldcorp en los proyectos mineros ubicados en el Valle de Siria, Honduras; San Miguel Ixtahuacán, Guatemala; y Carrizalillo, México. El veredicto del Tribunal señaló que las actividades de estos proyectos son altamente dañinas para el medio ambiente así como para la calidad de vida y salud de los habitantes y reiteró que vulneran la libre determinación de las comunidades. Este órgano, integrado por especialistas en salud, medio ambiente y derechos humanos, condenó la actitud cómplice e irresponsable de los Estados evaluados al no asegurar el ejercicio de derecho a los afectados. El TPIS exigió a Goldcorp que repare los daños que ha provocado a la salud, al medio ambiente y en general a las comunidades indígenas y campesinas de las localidades afectadas. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la implementación de proyectos extractivos mineros han provocado 165 conflictos sociales en América Latina, 35 de ellos en el área mesoamericana. El gobierno canadiense, a través de su Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional así como de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y otros mecanismos, interviene directamente en los asuntos de otros gobiernos para lograr un marco legal y un contexto político favorable para la operación de las mineras, destaca la sentencia del TIPS.

OTROS

El Presidente Otto Pérez Molina inaugura brigada militar en Petén

Guatemala, 09.07.2012 (AC).- Otto Pérez Molina inauguró el viernes 6 de julio la séptima brigada de infantería de fuerzas especiales de selva en el municipio La Libertad en el noroeste departamento Petén. El comando contará con 500 elementos y cubrirá los cinco municipios San Andrés, San Francisco, La Libertad, Las Cruces y Sayaxché en la frontera con México. Asimismo se estableció otra brigada de policía militar en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. La base militar instalada en San Juan Sacatepéquez ha generado descontento y rechazo por parte de sus pobladores, quienes el 30 de junio realizaron una marcha de protesta, en la que participaron más de 6 mil personas que portaban carteles con leyendas en las que se leía, entre otras, "Queremos lapiceros, no militares." y "Queremos maestros, no soldados."

Fuentes: Agencia CERIGUA (AC), elPeriódico (eP), La Hora (LH), Prensa Libre (PL), Siglo Veintiuno (SV).

2. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA: EN GUATEMALA

Equipo: María Cayena Abello (Colombia), Francisco Bernal (Colombia), Ilaria Tosello (Italia), Phil Murwill (Reino Unido), Christa Hijkoop (Países Bajos), Lucía Gorosito (Argentina/España), Claudia Molina (Argentina), Aline Herrera (Suiza/México), Kristel Best (Perú) y Valdivia Moutawali (Países Bajos).

2.1 INTERLOCUCIONES CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO, ENTIDADES INTERNACIONALES Y AUTORIDADES GUATEMALTECAS

Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los casos que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera mano debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno.

Cuerpo diplomático y otras entidades internacionales en Guatemala

- Jennifer Echeverría y Birgit Vleugels, oficiales de cooperación y programa de derechos humanos, Embajada de la Unión Europea, Ciudad de Guatemala
- Marina Comandulli, oficial de derechos humanos, Unidad Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Discriminación, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Ciudad de Guatemala

Autoridades guatemaltecas

- José Mario Cantoral Recinos, gobernador, Gobernación de Jalapa, Jalapa
- Otoniel Sandoval Bonilla, subcomisario, Subcomisaría 22 de la Policía Nacional Civil de Jalapa, Jalapa

2.2 REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El equipo en el terreno se reúne periódicamente con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, informarnos mutuamente sobre el trabajo que se realiza y recabar elementos que ayuden a desarrollar los análisis de coyuntura internos.

Organizaciones y personalidades de la sociedad civil guatemalteca

- Marco Canteo, director ejecutivo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Ciudad de Guatemala
- Idivina Hernández, directora ejecutiva, Seguridad en Democracia (SEDEM), Ciudad de Guatemala
- Jorge López, director ejecutivo, Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA (OASIS), Ciudad de Guatemala
- Andrea Hernández, abogada, y Julio González, Colectivo Ecologista Madre Selva, Ciudad de Guatemala
- Isabel Sáenz, organizadora nacional, Sector de Mujeres, Ciudad de Guatemala
- Edwin Canil, abogado, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Ciudad de Guatemala

Organizaciones sociales y agencias internacionales

- Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (CAIG / ACOGUATE)
- Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (FONGI)
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

2.3 ACOMPAÑAMIENTOS

A la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

Durante el mes de julio CONAVIGUA ha continuado impartiendo talleres y acompañando los procesos de inhumación. Antes de una inhumación en San Martín Jilotepeque (Chimaltenango), el 4 y 5 de julio, sufrieron el robo del vehículo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en la que se encontraban las osamentas de una de las víctimas del conflicto armado. Hemos mantenido contacto regular con las integrantes de CONAVIGUA mediante frecuentes visitas a su oficina en la Ciudad de Guatemala, llamadas telefónicas y reuniones.

Antecedentes: CONAVIGUA, como parte de su trabajo por la recuperación de la memoria histórica y el resarcimiento, desarrolla procesos de exhumaciones e inhumaciones en diferentes departamentos del país, sobre todo en Quiché, Chimaltenango y las Verapaces. Estos procesos provocan situaciones de mucha tensión en las comunidades rurales, donde conviven víctimas y victimarios, revirtiendo en ocasiones en amenazas que buscan el cese de la labor que realizan las mujeres y los hombres que integran CONAVIGUA. Debido al aumento de peticiones por parte de comunidades donde trabaja CONAVIGUA, la organización expandió su trabajo a las áreas de asesoría legal y organizativa a las comunidades en sus

procesos de autogestión. Entre otros, CONAVIGUA ha acompañado en 2010 el proceso de organización y desarrollo de las consultas populares de Buena Fe en los municipios de Uspantán, Quiché, y Lanquín, Alta Verapaz. Acompañamos a la asociación desde agosto de 2003 mediante visitas a su oficina y acompañamiento durante los traslados de sus integrantes a diferentes departamentos. Varias personas que integran la organización han sido blanco de graves amenazas contra su vida en el año 2010, debido a la labor que desarrollan.

A la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas (APMG)

Durante el mes de julio APMG ha realizado un intenso trabajo de difusión y socialización, a través de talleres y capacitaciones, sobre la relevancia e importancia de la declaración como área protegida de la montaña Las Granadillas. El 19 de julio acompañamos a integrantes de APMG a una reunión en Zacapa con representantes de las iglesias católica y luterana de Guatemala, la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCCND), el Colectivo Ecologista Madre Selva, Cáritas de Diócesis Zacapa y el Sindicato de Salud, entre otros. El objetivo de la reunión fue impulsar el proceso de defensa y protección de la montaña Las Granadillas y planificar acciones y estrategias nuevas de concienciación y socialización de distintos sectores de la población sobre la problemática en la montaña. El 31 de julio observamos en la ciudad capital la conferencia de prensa, convocada por APMG, para informar sobre los avances en el proceso de declaración de área protegida de la montaña Las Granadillas. Además hemos mantenido contacto regular con integrantes de APMG mediante llamadas telefónicas.

Antecedentes: APMG nace en Zacapa en 2003 para proteger el ecosistema de la montaña Las Granadillas, donde se hallan las principales reservas de agua y diversidad natural de la región, frente a diversos problemas identificados por la población local, como explotación de madera, tala ilegal, dedicación de grandes extensiones privadas de tierra para ganadería y monocultivos, deforestación y obstaculización del acceso a las fuentes de agua. Para ello APMG cuenta con apoyo de la Iglesia Luterana en Guatemala (ILUGUA), liderada en la región por el reverendo José Pilar Álvarez Cabrera, y del Colectivo Ecologista Madre Selva. Una de las metas de la asociación es lograr la declaración oficial de la montaña como espacio protegido. Sin embargo, los intereses económicos existentes sobre la tierra de Las Granadillas tornan peligroso el trabajo de APMG, cuyos miembros han enfrentado diversos tipos de persecución y amenazas desde que denunciaron el comercio ilegal de madera e iniciaron, conjuntamente con la población de la comunidad La Trementina, un proceso de auditoría social permanente sobre las licencias concedidas y la tala llevada a cabo en las fincas privadas de la montaña. Acompañamos a APMG desde agosto de 2008 y hemos observado desde entonces los espacios de diálogo en que ha participado con autoridades públicas y actores privados. A inicios de 2009 y a finales de 2010, los conflictos permanentes entre propietarios de fincas privadas en la montaña y la población de La Trementina y APMG derivaron en acusaciones penales contra miembros de la asociación y la comunidad, a raíz de denuncias interpuestas, entre otros, por el señor Juan José Olavarrueth, propietario de la finca Tachoró. En ambos casos las acusaciones estaban vinculadas al desarrollo del trabajo de protección de la montaña que realiza APMG y, también en los dos, las causas fueron sobreesídas en la primera audiencia ante el juez, resultando afectadas nueve personas en total por acusaciones infundadas (tres en 2009 y ocho en 2010). José Pilar Álvarez Cabrera ha sido blanco de amenazas de muerte y difamaciones en medios locales de comunicación durante estos conflictos.

A la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa (AMISMAXAJ)

Durante el mes de julio hemos mantenido nuestro acompañamiento a AMISMAXAJ durante las actividades que desarrolla para la defensa de los territorios cuerpo y tierra, como la promoción de la formación de la escuela feminista y las reuniones con protagonistas políticos y sociales activos en la montaña Santa María Xalapán, Jalapa. El 12 de julio acompañamos a integrantes de AMISMAXAJ en su viaje a Jalapa para impartir el segundo módulo de la escuela feminista sobre la defensa del territorio/cuerpo en la sede de la organización. El día siguiente las acompañamos a la aldea El Duraznal en la montaña Santa María Xalapán donde tuvo lugar la reunión con miembros de Acción Comunitaria Xinka Xalapán (ACOX), el Consejo Parroquial, el párroco y representantes de otras organizaciones y comunidades de la montaña. Durante esta reunión integrantes de AMISMAXAJ expresaron su preocupación por la deslegitimización de la presencia de las mujeres en la lucha por la tierra y el ambiente de conflictividad y desacuerdos existente.

Antecedentes: AMISMAXAJ se fundó en febrero de 2004 como una asociación de mujeres trabajadoras y se incorporó al Sector de Mujeres en junio del mismo año. A día de hoy AMISMAXAJ está integrada por 75 mujeres representantes de 15 comunidades xinkas de la montaña Santa María Xalapán, Jalapa. El trabajo de AMISMAXAJ se realiza actualmente a nivel local, departamental y nacional, desde un planteamiento político contra toda forma de opresión patriarcal, neoliberal, racista, homofóbica y lesbofóbica. Ha establecido alianzas estratégicas territoriales y nacionales para el impulso de su acción política. La

asociación trabaja activamente en la región de Jalapa en la promoción de los derechos de las mujeres, en la revitalización de su identidad étnica xinka y en la defensa de la tierra y el territorio. En particular, desarrolla un trabajo activo en la defensa de los bienes naturales y en procesos de auditoría e información social sobre la actividad y los planes de la industria minera y petrolera presentes en la región. Acompañamos a AMISMAXAJ desde julio de 2009. Varias personas que integran la organización han sido blanco de graves amenazas contra su vida en 2009 y 2010, debido a la labor que desarrollan.

A la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCCND)

Durante el mes de julio integrantes de CCCCND nos han informado que las amenazas y ataques continúan debido a la conflictividad, divisiones y disputas intracomunitarias derivadas de desacuerdos en la medición de la tierra. El 3 de julio acompañamos a miembros de CCCCND al Juzgado de Paz en Jocotán y al Ministerio Público (MP) en Chiquimula, donde fueron citados a diligencias judiciales de carácter conciliatorio. Asimismo el 23 de julio nos reunimos en la ciudad capital con el coordinador general Omar Jerónimo. El 26 de julio acompañamos a miembros de CCCCND a una reunión de líderes y una asamblea pública en la aldea Las Flores, Jocotán, donde se destacó la importancia de que las comunidades se organicen pacíficamente.

Antecedentes: CCCCND es una organización que forma parte de la Plataforma Agraria y trabaja en los municipios de Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Hermita, Chiquimula, desarrollando una labor formativa e informativa con las comunidades rurales sobre temas relativos a la economía campesina, el medio ambiente, derechos y territorio, en coordinación con otras organizaciones locales. En 2006 CCCCND se informó de la existencia de proyectos de construcción de tres hidroeléctricas en dos de los municipios del departamento: los proyectos El Puente y El Orégano en Jocotán y el proyecto Caparjá en Camotán; todos encajan en el proyecto más amplio de Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). Como parte de su trabajo, la asociación ha compartido la información con las comunidades del área, promoviendo espacios de evaluación y análisis de los efectos sobre el medio ambiente y las economías locales derivados de estos y otros proyectos de desarrollo planificados para la región. Así realizaron esta misma labor respecto del proyecto denominado Corredor Tecnológico, que pretende unir para el año 2015 la costa atlántica salvadoreña con el Océano Pacífico en Guatemala y que forma parte de los planes más amplios previstos en el marco del Proyecto Mesoamérica (sucesor del Plan Puebla Panamá, PPP). Integrantes de CCCCND han expresado que la falta de información y consulta a las comunidades de Chiquimula por parte de las instituciones públicas es una fuente de conflictividad. PBI acompaña a CCCCND desde 2009. Varios miembros de la organización han recibido amenazas y ataques debido a su trabajo con las comunidades. En 2010 integrantes de la coordinadora han denunciado amenazas de muerte e intimidaciones por parte de personas desconocidas armadas. Asimismo, varios medios de comunicación a nivel estatal y local publicaron declaraciones de autoridades locales que señalaban la responsabilidad de miembros de CCCCND y de la Asociación Campesina Camoteca (ACC, ver abajo apartado 2.4 SEGUIMIENTO), vinculándolos con protestas sociales que demandaban mayor información sobre la construcción del Corredor Tecnológico que afectaría la región.

A Q'a molo Q'i San Juan – Unamos Pueblos Sanjuaneros

Durante el mes de julio Q'a molo Q'i San Juan ha estado en contacto con el alcalde de San Juan Sacatepéquez para solicitar la anulación de la instalación de la brigada militar. El 12 de julio integrantes de Q'a molo Q'i San Juan participaron junto a otras organizaciones en una reunión de la OACNUDH en la que se trataron las denuncias presentadas en el marco de megaproyectos en el país. El 17 de julio asistieron en la Corte de la Constitucionalidad a la Vista Pública por la Ley de Minería (ver arriba apartado 1. NOTAS DE COYUNTURA, EFECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN, *No se encuentra un acuerdo a las disputas por actividades mineras*). Este mes registramos dos incidentes preocupantes: la desaparición durante varios días de un menor de la aldea San Antonio Las Trojes y el robo del vehículo de un testigo en la audiencia de tres personas recientemente capturadas. Acompañamos a miembros de la organización areuniones en el ayuntamiento, encuentros semanales en Santa Fe Ocaña y a la Procuraduría General de la Nación en el marco del seguimiento al secuestro del menor.

Observamos dos audiencias en el Juzgado de Mixco en el caso del asesinato de Francisco Tepeu de San Juan Sacatepéquez, por el cual los acusados Faustino Camey y Efraín y Porfirio Cotzojay llevan más que tres años y medio en prisión preventiva. El 9 de julio, durante el segundo debate oral del proceso, un perito y cuatro testigos de la acusación dieron sus testimonios. El 24 de julio se abrió el espacio para los demás testigos de la acusación, pero por ausencia de la parte querellante se suspendió. Además hemos mantenido contacto regular con integrantes de Q'a molo Q'i San Juan vía llamadas telefónicas.

Antecedentes: Q'a molo Q'i San Juan es una organización que aglutina a vecinos y vecinas de diversas comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez, que participan en la lucha por la defensa del

territorio y los recursos naturales de la región. Desde el 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. viene trabajando en el proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica y una cantera en la finca San Gabriel Buena Vista y las aldeas San José Ocaña y San Antonio las Trojes I y II. En esta fábrica Cementos Progreso participa con 80% de la inversión y el 20% restante pertenece a la empresa multinacional suiza Holcim. El 13 de mayo del 2007, sin el respaldo de la municipalidad, las comunidades de San Juan Sacatepéquez llevaron a cabo una consulta popular de buena fe sobre la instalación de la fábrica, que contó con la participación de 8.950 personas, de las cuales 8.946 votaron en contra y 4 a favor. Aunque el Alcalde y el Consejo Municipal se comprometieron a tomar en cuenta los resultados de la consulta de forma previa al otorgamiento de cualquier licencia, se mantienen los trabajos de instalación de la fábrica. Durante ya más de cuatro años, los habitantes de San Juan Sacatepéquez han denunciado numerosos abusos a los derechos humanos y una fuerte campaña de criminalización en su contra. El proceso de diálogo en el que han participado con diversas autoridades e instituciones públicas guatemaltecas, ha concluido sin resultados que conduzcan a la transformación o resolución del conflicto¹. PBI acompaña a Q'a molo Q'i San Juan desde diciembre de 2009 a raíz de la petición de la organización debido a amenazas y persecución de las que han sido blanco varios de sus integrantes y de las comunidades que representan.

Al Consejo de Comunidades de Cunén (CCC)

Durante el mes de julio hemos aumentado e intensificado nuestro contacto con integrantes de CCC. El 24 de julio les acompañamos a la presentación y entrega del informe sobre las consultas comunitarias en Cunén en el salón municipal de Cunén y en la comunidad Xetzac, Cunén. El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) realizó este estudio a petición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y según los resultados de esta investigación las consultas comunitarias fueron hechas sin manipulación y respetando la manera tradicional de las comunidades indígenas participantes, considerando las mismas totalmente legítimas. Durante estas actividades estuvieron presentes, entre otros, representantes de CIRMA, OACNUDH, la iglesia presbiteriana, el Consejo de Pueblos K'iche's (CPK) y las comunidades y el Alcalde de Cunén.

Antecedentes: El 14 de enero de 2009 las comunidades del municipio de Cunén en el departamento Quiché dieron comienzo a un proceso más organizado de defensa de sus territorios, bienes naturales y derechos humanos durante una asamblea realizada en ese municipio, a partir de la cual se conformó CCC. El consejo está constituido por 22 miembros de 8 microregiones que fueron nombrados por sus comunidades. En octubre de 2009 organizaron junto a las comunidades una consulta comunitaria sobre las actividades de explotación minera e hidroeléctrica y en general respecto de la implementación de megaproyectos, en la que alrededor de 19.000 personas de 71 comunidades se pronunciaron en contra. PBI observó parte del proceso de preparación y el desarrollo de esta consulta comunitaria, y hemos comenzado a acompañar a CCC en febrero de 2010, debido a la situación de riesgo para la seguridad de los actores que promueven activamente el derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales en esta región.

A la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEFUGA)

Durante el mes de julio hemos visitado regularmente la oficina de UDEFEGUA y nos hemos reunido frecuentemente con sus integrantes. UDEFEGUA nos ha compartido su análisis sobre la situación coyuntural e identifica líneas de consolidación de una política de explotación de los recursos naturales y reversión en relación a la situación de los derechos humanos en la coyuntura actual de Guatemala. Además sostiene que la imagen de la seguridad ciudadana ofrecida por la prensa no refleja la percepción de la mayoría de la población. UDEFEGUA ha dado seguimiento a los juicios en el caso de San Juan Cotzal así como a los procesos abiertos a raíz de la declaración del Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas en mayo. Además la unidad ha trabajado en la elaboración de un manual de seguridad para defensoras enfocado en el análisis de las agresiones recibidas que limitan el espacio de defensa de los derechos humanos.

Antecedentes: UDEFEGUA fue fundada en 2004 con el objetivo de promover la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y contribuir así a la protección de sus espacios de trabajo. Sus programas apoyan a defensores y defensoras de derechos humanos que reciben amenazas y a organizaciones de las que forman parte y les asesoran en la prevención y respuesta frente a amenazas y ataques, a través de información, capacitación, monitoreo y apoyo psicológico. Junto a ello UDEFEGUA promueve la protección de estas personas por parte de instituciones gubernamentales y de la comunidad internacional. PBI mantiene desde hace años una relación de colaboración con UDEFEGUA. En 2007 le ha prestado acompañamiento internacional tras un episodio de amenazas. Posteriormente, tras amenazas recibidas en mayo de 2009, las personas afectadas denunciaron los hechos al MP y volvieron a solicitar

¹ Mayor información sobre antecedentes en el informe especial de PBI Guatemala publicado en 2010: http://www.pbi-guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spanish/Mujeres_Completo_ESP.pdf

acompañamiento a PBI. Varias organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por tales hechos y expresaron que se trata de un "serio patrón de persecución". En marzo de 2010 UDEFEGUA denunció el allanamiento del domicilio y la manipulación del vehículo de dos de sus integrantes. Mantenemos visitas regulares a su oficina, reuniones periódicas con su personal y acompañamiento durante sus desplazamientos a departamentos del interior del país, necesarios para desarrollar sus actividades de investigación y verificación de denuncias sobre ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.

A la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)

UVOC y algunas de las comunidades que acompaña nos han informado con extrema preocupación que varios dirigentes comunitarios han sufrido amenazas de muerte así como la presencia de personas armadas, rumores sobre órdenes de desalojo y amenazas de órdenes de captura contra varios miembros de la comunidad. A pesar de que UVOC participa en un proceso de diálogo con el Estado recientemente se emitió una orden de desalojo de la comunidad 20 de Octubre (Cahabón, Alta Verapaz) que fue aplazada después de que el abogado de la UVOC presentara un recurso de amparo. Debido a esta situación se canceló el 5 de julio la mesa de diálogo que tiene lugar cada mes en Cobán o Santa Cruz Alta Verapaz para tratar problemáticas relativas a la conflictividad agraria en la región.

El 12 de julio observamos una rueda de prensa de la UVOC, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) sobre la conflictividad en el país, el riesgo continuo - a pesar de las mesas de diálogo - de desalojos en Alta Verapaz y la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para las poblaciones desalojadas en el Valle del Polochic. A final del mes acompañamos al abogado de la UVOC en sus viajes La Tinta, Valle del Polochic, y Cahabón donde se reunió con el Ministerio Público y el Juzgado de Paz. Durante el mes de julio hemos mantenido contacto regular con integrantes de UVOC mediante llamadas telefónicas y reuniones en sus oficinas en la Ciudad de Guatemala y en Santa Cruz Alta Verapaz.

Antecedentes: UVOC es una organización campesina de los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz que trabaja fundamentalmente en la defensa y promoción del acceso a la tierra de la población campesina y les brinda asesoría sobre la legalización de sus terrenos. También ofrece capacitación y apoya a las comunidades que integran la unión mediante la gestión de proyectos de desarrollo. Hemos acompañado a Carlos Morales, dirigente de UVOC, desde mayo de 2005, porque ha sido víctima de amenazas de muerte, intimidaciones y persecución por sujetos desconocidos. Igualmente, continuamos prestando atención a la delicada situación de algunas comunidades campesinas que integran la organización en el marco de sus procesos de lucha por la tierra y acceso a la misma.

Al abogado de derechos humanos Édgar Pérez Archila

En julio hemos intensificado nuestro acompañamiento al licenciado Édgar Pérez Archila. A mediados del mes se reiniciaron las audiencias en la fase de debate oral en el caso contra el exalcalde y otras cinco personas de San Juan Cotzal (Quiché) acusados de la ejecución extrajudicial del agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Pedro Rodríguez Toma y la comisión de otros delitos graves, como dirigente de la junta local de seguridad en el municipio, contra defensores de derechos humanos. Recientemente se ha incluido entre las acusaciones el delito de tortura. Este mes también se realizaron las audiencias por casación en el caso de Las Dos Erres. Avisamos al cuerpo diplomático sobre estas audiencias y acompañamos a Édgar Pérez Archila en varias ocasiones.

Antecedentes: En el mes de agosto de 2010 comenzamos a acompañar al abogado y defensor de derechos humanos Édgar Pérez Archila en su trabajo de defensa de la justicia y lucha contra la impunidad. El abogado y el bufete jurídico de derechos humanos que lidera, trabajan en procesos judiciales abiertos por masacres cometidas durante el conflicto armado interno y otras violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y actualmente. Debido al alto perfil de estos y otros casos a cargo del licenciado Pérez y varios incidentes de seguridad dirigidos hacia su persona en los últimos años, le acompañamos durante su trabajo en el marco de varios procesos penales, entre otros por la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez en 1992; por la masacre en la comunidad Las Dos Erres, Petén, en 1982; por la masacre en la comunidad Río Negro, Alta Verapaz, en 1982; así como en el proceso por genocidio que obra ante los tribunales guatemaltecos desde el año 2000.

Al Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)

Durante el mes de julio hemos mantenido contacto frecuente con responsables y empleados de AHPN vía llamadas telefónicas y visitas periódicas a las instalaciones del archivo. El 5 de julio tuvo lugar la presentación del informe sobre los avances y logros de AHPN y se entregó la colección de las investigaciones realizadas por

el AHPN. El 27 de julio asistimos a la reunión del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (FONGI) donde AHPN participó como institución invitada para presentar los avances en la digitalización de los documentos encontrados e informando sobre la situación actual del archivo. Para información actualizada, noticias y actividades realizadas se puede visitar la página web <http://archivohistoricopn.org>.

Antecedentes: Los archivos de AHPN fueron hallados fortuitamente en el año 2005 por personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), cuando realizaba una diligencia de prevención ante el almacenaje de explosivos en instalaciones de las fuerzas públicas de seguridad guatemaltecas. En un edificio de la zona 6 de la capital, construido durante el conflicto armado interno para albergar el hospital de la Policía Nacional (PN), pero al que nunca se le dio tal uso, fueron descubiertos 80 millones de documentos, abandonados, apilados y en deficientes condiciones de conservación. Se trata de la documentación histórico-administrativa de PN, desde su creación en 1881 hasta su cierre en 1997, cuya participación en la comisión de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno fue evidenciada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). En su informe Guatemala: Memoria del Silencio constata que PN fue un cuerpo operativo de la inteligencia del ejército, sirviendo de fachada de la G-2 y actuando bajo sus órdenes en la mayoría de casos. En varias ocasiones los diferentes organismos del Estado, incluido el Ministerio de Gobernación y la propia PN durante el período de investigación de CEH, negaron la existencia de archivos o acervos documentales que posibilitaran la investigación de violaciones a los derechos humanos. Tras una primera fase de trabajo encabezada por PDH para la recuperación de la documentación y la creación de las condiciones necesarias para el acceso público a la información contenida en ésta, los esfuerzos se han centrado a partir de 2010 en la institucionalización de AHPN, en la búsqueda de certeza política, jurídica y administrativa, la estabilización técnica del acervo documental y la puesta en marcha de las condiciones y los procedimientos para asegurar el acceso público y permanente a la información que contiene. Hoy AHPN forma parte del Archivo General de Centroamérica, su titularidad y rectoría competen al Ministerio de Cultura de Guatemala, y funciona exclusivamente a partir de donaciones y fondos de la cooperación internacional. El archivo también es integrante de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, pues el edificio que lo alberga fue utilizado como centro de detención clandestino de PN durante el conflicto armado. En la dirección de AHPN y en la coordinación y el desarrollo del trabajo de rescate de la documentación y de promoción del acceso público a la información registrada, participan activistas de derechos humanos de reconocida trayectoria en el país. En las tareas de conservación, organización y descripción archivística trabajan 150 personas. El 30 de abril de 2012, según registro de AHPN, se contaba con más de 14 millones de imágenes de documentos digitalizados, incluyendo más de 19.000 libros. Hasta esa fecha han recibido 4.503 requerimientos de información, que han sido respondidos mediante la entrega de 45.020 documentos (26.749 a familiares de víctimas y 29.335 al Ministerio Público, un 98% de ellos a la Fiscalía de Derechos Humanos).

2.4 SEGUIMIENTO

Regularmente recibimos peticiones de acompañamiento por parte de organizaciones sociales y defensores/as de derechos humanos que son o se sienten amenazados/as. A través del acompañamiento internacional, buscamos la reducción de las amenazas y la apertura de un espacio más seguro para su actuación. Una vez que disminuyen el nivel de riesgo, las amenazas y los incidentes de seguridad de las organizaciones y personas acompañadas, continuamos el acompañamiento en fase de seguimiento. Ello implica que disminuimos el acompañamiento físico y nos mantenemos en contacto con ellas a través de visitas y/o llamadas a sus lugares de trabajo y oficinas. Al mismo tiempo permanecemos con disponibilidad para atender solicitudes concretas de su parte que, por razones específicas, requieran de la presencia internacional. Actualmente damos seguimiento a la situación de la siguiente organización social:

A la Asociación Campesina Camoteca (ACC)

En julio hemos mantenido un contacto regular con los integrantes de ACC vía llamadas telefónicas. En este período reportaron amenazas y rumores recibidas en el marco de las actividades que desarrollan a favor de la defensa del territorio y la protección del medio ambiente. Se han reunido con otras organizaciones en Jocotán y Chiquimula y están elaborando nuevas medidas de seguridad.

Antecedentes: ACC fue fundada en 1988, compuesta en aquel entonces por promotores de salud y comadronas del municipio Camotán, Chiquimula. En la actualidad la asociación es miembro activo de la Coordinadora de Organizaciones Populares Indígenas, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO). Su objetivo primordial es la defensa de la vida y de los recursos naturales y su fin último es la búsqueda del bienestar del ser humano y de la naturaleza en la que vive. Está compuesta por 718 socios y socias que velan por el cumplimiento de las leyes y dan seguimiento a la violación de los derechos humanos en la

región del oriente del país. Mantienen una estrecha relación de alianza y cooperación con la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCCND), en particular con respecto al trabajo de información comunitaria en temas como la tierra, la agricultura y la defensa del medio ambiente. Cuando la asociación conoció los planes de construcción de las hidroeléctricas El Puente, El Orégano y Caparjá (ver antecedentes del acompañamiento a CCCCND) y el proyecto del Corredor Tecnológico, que afectan a varios municipios del departamento, comenzaron a trabajar para informar a las comunidades sobre los efectos de los megaproyectos para el medio ambiente y su situación económica. PBI acompaña a ACC desde 2009. Dos de sus miembros fueron detenidos en noviembre de 2010, acusados de los delitos de actividad en contra de la seguridad interior de la nación y reuniones y manifestaciones ilícitas, por participar en una concentración pública llevada a cabo más de 6 meses antes (el 30 de marzo de 2010), que contó con la participación de más de 70 personas que manifestaban su oposición a los planes y proyectos de interconexión eléctrica en la región. El 2 de marzo de 2011 observamos la segunda audiencia judicial en Chiquimula en la que comparecieron las dos personas acusadas. El juez resolvió aplicar un criterio de oportunidad, desistiendo de la acción penal: estableció una multa de 1.000 quetzales, respectivamente, y la prohibición de promover o participar en actividades de manifestación ilícita.

2.5 OBSERVACIONES

PBI Guatemala proporciona observación internacional en aquellos eventos públicos en que las organizaciones sociales guatemaltecas lo requieren, para mostrar la atención y el interés internacional y para poder comunicar fuera del país aquello que observamos.

Desde mediados del mes de junio, alumnos normalistas mantenían ocupadas varias escuelas normales en diferentes municipios del país, por su descontento con la falta de consulta previa sobre la reforma y prolongación de la carrera magisterial. El 2 de julio observamos el anunciado desalojo de la escuela normal Rafael Aqueche en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. En el exterior del edificio habían agentes y antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC), bomberos y ambulancias. Dentro de su cordón se encontraban autoridades, estudiantes y familiares, periodistas y representantes de la sociedad civil nacional e internacional. En la escuela estaba Cynthia del Águila, Ministra de Educación, negociando con los estudiantes sobre la entrega del edificio a las autoridades. Más tarde llegó Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación, quien habló con la prensa, las autoridades presentes y los estudiantes. A partir de las negociaciones al final los estudiantes aceptaron ser desalojados voluntariamente sin mayor disturbio ni violencia.



El 28 de julio observamos la asamblea del Consejo de Pueblos K'iche's (CPK) en Santa Cruz del Quiché. La actividad, que contaba con la presencia de unas 200 personas, se desarrolló de forma tranquila con presentaciones de varios de los integrantes de CPK. Sin embargo, durante esta observación nos informaron de varios incidentes de seguridad, como amenazas contra líderes y lideresas de CPK.

3. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA – FUERA DE GUATEMALA

Los representantes regionales, la oficina de coordinación del proyecto y otros miembros del comité y de la oficina del proyecto, así como los grupos nacionales de PBI, llevan a cabo campañas de relaciones públicas con numerosas organizaciones no gubernamentales, agencias y gobiernos nacionales, parlamentarios, etcétera. Estas reuniones se traducen en el desarrollo y fortalecimiento de una red de apoyo del proyecto, herramienta imprescindible para el funcionamiento de la presencia internacional de PBI en Guatemala.

4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En esta sección reproducimos algunos comunicados (algunos abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.

10.07.2012 Comunicado Colectivo Ecologista Madre Selva

Mujeres en Resistencia: La lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales

El día domingo 1 de julio del año 2012, en la resistencia comunitaria localizada en La Puya San Pedro

Ayampuc, se realizó el foro Mujeres en Resistencia -la lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales-. Esta actividad fue un intercambio de experiencias entre lideresas de los departamentos de El Quiché, Santa Rosa, San Marcos y las mujeres de la resistencia antiminera en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala. Las ponentes: Aura Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K'iche's, Gregoria Crisanta Pérez y Crisanta Olivia Pérez de la Pastoral de Medio Ambiente de San Miguel Ixtahuacán, Yolanda Girón del Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza Codidena y Lesbia Villagrán del Comité Defensor de la Vida de San Rafael las Flores, compartieron sus experiencias con las mujeres y comunidades en La Puya donde están bloqueando la entrada a la mina. Las invitadas compartieron información sobre las acciones pacíficas y estratégicas que han tomado como comunidades para evitar la entrada de proyectos mineros y grandes hidroeléctricas, también compartieron sus experiencias personales sobre la criminalización a las que han sido sometidas por defender su territorio y además, cómo han desarrollado consultas de vecinos o comunitarias para oponerse a grandes proyectos que buscan desarrollarse en su territorio. Esta actividad permitió resaltar varios temas importantes sobre la resistencia de las mujeres:

- Existe un dolor compartido por la forma en que se violan los derechos de los pueblos, en particular a las mujeres, pero también la fuerza extraordinaria de estar juntas. Por lo tanto es necesario crear alianzas entre las mujeres del país que estamos resistiendo y defendiendo el territorio.
- La resistencia pacífica ha sido individual y colectiva y se ha hecho de múltiples maneras. Se han efectuado actividades simbólicas como entregar pilones de café, llevar rosas a las puertas de la mina, caminata de la niñez, caminatas acompañadas de música y poesía elaborada por las comunidades. Esto ha resignificado el sentido de lucha comunitaria y social.
- Las mujeres tenemos decisión y sabemos lo que nos afecta, pero es muy importante que las comunidades apoyen la participación de las mujeres. Las opresiones no vienen sólo de las empresas o del Estado, también vienen de otros ámbitos como el hogar. Además, es importante fortalecer la unidad y organización de las comunidades porque la división es ganancia para otros.

Al finalizar la actividad se recibió una llamada muy emotiva de Yolanda Oquell saludando a sus compañeras y compañeros de La Puya. Ella expresó su dolor por no poder estar allí en ese momento, pero les animó a seguir adelante en la lucha. Además enfatizó en la necesidad de no dejarse dividir ni manipular por la empresa y seguir unidos en la resistencia pacífica. Como Colectivo Madre Selva, agradecemos el apoyo de las comunidades y organizaciones participantes. Esperamos que este sea uno de muchos encuentros que apoyen el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y hombres que defienden la tierra, el agua, la vida.

A principios de 2011 vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala se dan cuenta que está operando, con licencia de exploración, una empresa minera de oro y plata en su territorio. Se trata del proyecto minero El Tambor que consiste en varias licencias entre una de Progreso VII Derivada, propiedad de la empresa canadiense Radius Gold Inc. Este proyecto fue autorizado sin consulta previa a la población de ambos municipios. En el mes de marzo del presente año, los pobladores deciden bloquear la entrada a la mina y se instala el campamento La Puya donde los vecinos se turnan las 24 horas para evitar el ingreso de la maquinaria al proyecto. El 8 de mayo a la una de la mañana la empresa intenta ingresar, aproximadamente, 25 camiones con maquinaria custodiados por 40 patrullas de la Policía Nacional Civil. Los vecinos se organizan y llegan 2000 personas de las aldeas aledañas al lugar para impedir el ingreso de la empresa. A pesar de la provocación por parte de la empresa y la PNC, y gracias a la actitud pacífica de la población, no se incurre en violencia.

El 13 de junio sufre un atentado contra su vida la destacada lideresa Yolanda Oquell de San José del Golfo quien se encuentra estable pero sin poder regresar por ahora a su comunidad. La resistencia comunitaria y pacífica ya tiene más de cuatro meses en el lugar y la lucha sigue en pie a pesar de las amenazas e intimidaciones. Cuatro días después de esta actividad, una de las ponentes, Lolita Chávez, junto con otras miembros del Consejo de Pueblos K'iche's, sufrieron un atentado contra su vida. El hecho ocurrió después de realizar una manifestación pacífica en la comunidad Xetnap quinta La Laguna en la que expresaron su desacuerdo con el alcalde de Santa Cruz del Quiché, quien apoya la instalación de torres de transmisión eléctrica de la empresa ENEL sin consulta previa a la población. Lamentamos y repudiamos este hecho y exigimos el esclarecimiento de este delito contra la vida de las lideresas quienes están luchando por la defensa de su territorio.

PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS Y COMUNICADOS REPRODUCIDOS. LAS NOTAS DE COYUNTURA DEL APARTADO 1 NO SON COPIA LITERAL DE LAS FUENTES CONSULTADAS: SE HA SIMPLIFICADO LA REDACCIÓN Y SINTETIZADO EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES.

- PROYECTO PBI GUATEMALA -

Oficina del Equipo en Guatemala
3ª Avenida "A" 3-51, Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono/fax: (+502) 2220 1032
Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org
Página web: www.pbi-guatemala.org

Oficina de Coordinación del Proyecto
Rúa Mercado 6, 4ªA
15001 A Coruña, Galiza, Estado Español
Teléfono: (+34) 881 874 772
Correo-e: coordinacion@pbi-guatemala.org